

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Mérida, Yucatán a 12 de septiembre de 2024

**ANONIMO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente, y en contestación al requerimiento de información solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha de presentación **9 de septiembre de 2024**, que guarda relación con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio **312005724000027**, en la cual se requirió lo siguiente:

“Quiero que me informen sobre la relación de expedientes vigentes del Mecanismo de Queja que tienen a su cargo y me proporcionen la versión digital de cada expediente vigente.” (sic)

En ese contexto, atento a las peticiones antes transcritas, con fundamento en los artículos 1, 18, 129 y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en congruencia con los numerales 1, 2, fracción I y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, le informo lo siguiente:

Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta unidad administrativa, se tiene a bien remitir la relación de los expedientes del Mecanismo de Queja, vigentes a la fecha de la solicitud de acceso a la información, relacionados a continuación:

	Expediente
1	04/SESEAY/DJ/MQ/2019
2	16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021
3	17/SESEAY/DJ/MQ/2022 y su acumulada 19/SESEAY/DJ/MQ/2022

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Asimismo, en cuanto a la entrega en versión digital de cada uno de los expedientes antes relacionados, me permito informar que en cuanto al expediente **04/SESEAY/DJ/MQ/2019**, en fecha 21 de enero de 2021, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, cabe destacar que la confirmación de reserva de la información realizada por el área fue confirmada por dicho órgano colegiado por cuatro años. Por lo que corresponde a los expedientes **16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021 y 19/SESEAY/DJ/MQ/2022**, el 27 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, reservándose dichos expedientes por el período de cinco años; conviene precisar que al día de hoy dichos expedientes aún se encuentran en trámite, por lo que las causas que dieron origen a la reserva aún subsisten.

Ahora bien, en relación al expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, se informa que como lo ha interpretado el Pleno del Alto Tribunal en diversas ocasiones, el derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario tránsito de las vías adecuadas para ello.

Resulta aplicable al caso en la parte conducente la tesis P. LX/2000, del Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, visible en la página 74, cuyo rubro es el siguiente:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Es así que, en atención al dispositivo constitucional antes referido, se obtiene que la información bajo el resguardo de los sujetos obligados, encuentra como excepción aquellos que son clasificados como reservado o confidencial, cuando de su propagación pueda derivarse perjuicio por causa de **interés público** y seguridad nacional.

De ahí que, resulte pertinente plasmar el orden jurídico aplicable al caso concreto, por lo que se procede a la transcripción de los artículos 103, 104, 106, fracción I; último párrafo del 108, fracciones VIII, IX, X y XI del 113 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos Vigésimo séptimo; Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales):

La **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, determina:

*“**Artículo 103.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Artículo 104. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Artículo 106. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- (...)*

Artículo 108. *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 113. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

- (...)*
- VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*
- IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*
- X. Afecte los derechos del debido proceso;*
- XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*
- (...)*

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Artículo 114. *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”*

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan:

“Vigésimo séptimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:*

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;*
- II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;*
- III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y*
- IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.*

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

(...)

Vigésimo octavo. *De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;*
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad; y*

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.

Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;*
- II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;*
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y*
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.*

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y*
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; y*
- III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.*

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurren los siguientes elementos:

- 1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y*
- 2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.*

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

***Trigésimo cuarto.** El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva. Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido. Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.”*

Conforme a las disposiciones transcritas, podemos advertir los supuestos en los cuales el sujeto obligado se encuentra impedido para remitir la información solicitada, en el caso concreto, el acceso a las documentales que integran el expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, así como las actuaciones que se han realizado para darle la debida atención, puesto que el estado procesal se encuentra actualmente **en trámite**, lo que impide jurídicamente proporcionar información relativa al mismo, o bien, permitir su consulta; toda vez que su divulgación lesionaría el interés jurídicamente protegido por la legislación aplicable.

De igual manera, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 3 del Reglamento del Mecanismo de Queja, se cita:

***“Artículo 3. Finalidad.** El mecanismo de queja tiene como finalidad sustanciar las quejas presentadas ante la comisión ejecutiva por cualquier persona, o aquellas iniciadas de oficio, a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que se aporten o, en su caso, se hayan obtenido mediante la investigación, determine la existencia o no de faltas administrativas o hechos de corrupción y, en su caso, dirija a las autoridades o servidores públicos estatales o municipales, o particulares responsables, una recomendación no vinculante, pública y de carácter institucional, que contenga una política pública que enmarque buenas prácticas, en forma activa o pasiva, con el firme propósito de fortalecer la cultura de integridad y el comportamiento ético, sin que esa determinación vincule a las*

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

autoridades integrantes del comité coordinador en el ejercicio de sus atribuciones originarias, o bien, remita el expediente a la instancia competente.”

De ahí que el conocimiento público de esta información pueda entorpecer, no solo una adecuada investigación, sino que impediría a esta Entidad determinar la probable existencia o no de una falta administrativa o hecho de corrupción, lo que desde luego, resultaría contrario a lo que la sociedad en general desea conocer como interés legítimo social, ya que al brindar una información indeterminada, supone una mayor afectación social en contraste con el derecho de acceso a la información pública.

Bajo lo argumentado, resulta aplicable la causal de reserva, en virtud de que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que, se actualizan los elementos señalados en los numerales Vigésimo séptimo; Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales; por los siguientes motivos:

1. Existe un procedimiento de investigación, el cual versa sobre la posible existencia de faltas administrativas o hechos de corrupción, esto es, un procedimiento del que pudiera derivar canalizaciones a instancias de responsabilidad, al tenor de la fracción I del numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales.
2. Dichos procedimientos se encuentran en curso o trámite, en los cuales se precisa una fecha de inicio, mas no una fecha de conclusión o terminación, toda vez que los asuntos en cuestión se encuentran en un proceso deliberativo que se sigue de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento del Mecanismo de Queja.
3. La información consiste en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo, lo anterior, en virtud de encontrarse en trámite el procedimiento de investigación del que son objeto los expedientes solicitados.
4. Existe una vinculación directa entre la información solicitada y las actuaciones que realiza esta Entidad con el procedimiento de investigación.
5. Su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, toda vez

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

que se tratan de procedimientos seguidos en forma de juicio, mismos que no han causado estado, es decir, que no se ha emitido una decisión o resolución definitiva. Con base en lo anterior, resulta notorio que el resguardo de los expedientes a que se ha hecho referencia tiene por objeto el eficaz mantenimiento de los procesos que ante esta Entidad se llevan, no sólo en su parte formal (como integración documentada de actos procesales), sino también material (como construcción y exteriorización de las decisiones que tome la autoridad competente).

Resulta aplicable en la especie, la tesis I.1°.A. E K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Décima Época, visible en la página 1523, cuyo rubro es el siguiente:

"INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada".

Establecido lo anterior, resulta evidente que, de entregar la documentación, se causaría un daño presente, probable y específico al interés público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo las siguientes valoraciones:

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Daño Presente: Se advierte que puede transgredir u obstruir la conducción de los expedientes o de los procedimientos, en tanto no hayan concluido. Asimismo, al ser el mecanismo de queja un procedimiento seguido en forma de juicio, al proporcionar documentos que integren expedientes en trámite afectará el derecho al debido proceso y los principios que lo rigen, como lo son la igualdad, legalidad, justicia, imparcialidad y seguridad jurídica.

Daño Probable: De entregar la documentación en cuestión, esta podría ocasionar que terceras personas realicen acciones que se traduzcan en el entorpecimiento del procedimiento que se lleva actualmente y que son materia de la resolución que se emita en el momento oportuno, o bien, en su caso puedan vulnerar la conducción de los mismos. Lo anterior, en razón de que en este expediente se señalan los argumentos manifestados por las partes y cuya divulgación podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de todo procedimiento, en tanto no se de una conclusión respectiva y a su vez, haya causado estado.

Daño Específico: La información solicitada puede ocasionar que terceras personas la utilicen en beneficio propio, por lo tanto, el hecho de hacer pública información que contiene un expediente sin concluir, amenaza el interés público protegido por la Ley. En consecuencia, el área responsable de la información debe garantizar en todo momento el desarrollo de los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio.

Ponderación de intereses en conflicto

En relación con lo anterior, también es dable analizar si existe o no una ponderación de intereses en conflicto.

En primer término, resulta oportuno invocar lo que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define como interés público, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII de su artículo 3º:

***“Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*
(...)

***XII. Información de interés público:** Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya*

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados”

Bajo esa tesitura, es menester señalar que el interés que supondría la divulgación de la información, misma que, como se indicó anteriormente, guarda relación directa con expedientes que se substancian a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de ahí que deba arribarse a la conclusión de que no se supera el interés público general; lo anterior, en razón de que la información solicitada versa acerca de quejas promovidas mismas que forman parte de diversos expedientes que se llevan en trámite cuya tramitación consta de distintas etapas que se encuentran reguladas en un orden jurídico denominado Reglamento del Mecanismo de Queja.

Además, como se ha indicado anteriormente, en atención a la finalidad que establece el artículo 3 del Reglamento en cita, cabe destacar que mediante dicho mecanismo se busca prevenir la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción, así como mejorar el desempeño del control interno, a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil para obtener la imparcialidad y la integridad necesarias en la actividad u operatividad presente, tanto en el sector público como en el privado, a fin de tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor, cumpliendo con ello lo establecido en la tesis I.9o.P.255 P, identificada con el número de registro 2021043, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2335, Tomo III, Noviembre de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:

“DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA POR EL HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBJETO COMBATIRLA NO SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Si bien conforme a los artículos 6o., 108, 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

veintisiete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia de un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades administrativas que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos públicos y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando la quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del delito, si no está demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la carpeta de investigación respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, en virtud de que la Constitución General de la República, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan facultad para participar en un procedimiento penal con dicho carácter”.

En ese contexto, atendiendo al hecho de que no se han concluido los expedientes antes señalados, se hace evidente que la difusión del expediente en cuestión puede llegar a trastocar el proceso de investigación conducente; la posterior determinación y en consecuencia la documentación base que pudiera dar lugar a la emisión de una recomendación o política pública.

Ahora bien, ante la falta de constancias que permitan acreditar que los expedientes se encuentran concluidos, se debe observar el contenido del supuesto normativo estipulado en la fracción XI, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se aprecia que el propósito de esa causal de reserva es lograr el eficaz mantenimiento de los procesos, específicamente por cuanto a la sana e imparcial integración del expediente, desde su apertura hasta su total resolución (cause estado), en el entendido de que, las constancias que nutren su conformación sólo atañen a las partes y a la autoridad resolutoria, quien debe velar por el correcto equilibrio del proceso.

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno destacar que la publicación de la información contenida en los expedientes representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio para el ejercicio del derecho al debido proceso, así como los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídicas, toda vez que su divulgación propiciaría alteraciones en elementos con valor probatorio y posibles afectaciones a la integridad de las partes, dado a que la información a la que se alude, corresponde a datos sensibles, lo cual podría afectar la integridad de los involucrados, alterar el curso del procedimiento de queja, e incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda.

De igual manera, la clasificación de la información se adecúa al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, puesto que la reserva de información únicamente se aplica a información relativa a expedientes en trámite llevados ante esta Secretaría Ejecutiva, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción del trámite del mecanismo de queja o de poner en riesgo la integridad de los involucrados; asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de reserva, se justifica la clasificación de información relativa a los expedientes de queja tramitados ante esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de tal suerte, que esta resolución no contraviene con lo dispuesto en la legislación aplicable.

Como criterio orientador, se tiene la tesis 1a. VIII/2012 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, visible en la página 656, cuyo rubro es el siguiente:

“INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.”

Periodo de reserva.

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Correlativo a lo anterior, esta Unidad Administrativa considera que la información descrita debe ser clasificada como reservada por el periodo de cinco años desde la fecha de confirmación de la reserva por parte del Comité de Transparencia, en virtud de que como se ha explicado en las líneas que anteceden, el expediente sigue en trámite, por tanto, mientras el expediente siga abierto, no se haya dictado la resolución correspondiente o no hayan causado estado; las condiciones que motivan a la reserva de la información se siguen actualizando, lo que conlleva a la protección de la información que de aquel se derive hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 101, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con apoyo en el criterio que establece el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales.

Robustece a lo expresado en el párrafo que antecede, la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, con número de registro 170722, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

“INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN.

*En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada.** No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva.”*

(Énfasis agregado)

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del numeral 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la fracción I del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por el momento no resulta pertinente entregar al solicitante la información requerida sobre el expediente de queja en

Dirección: Dirección Jurídica
Oficio: SESEAY/DJ/136/2024
Solicitud No.: 312005724000027
Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la
información pública.

cuestión, por lo que solicito se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para que de acuerdo con lo establecido en los numerales 103 y 137 de la Ley General en cita, sea confirmada la clasificación de la información requerida, en los términos anteriormente expuestos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

(RÚBRICA)

Lic. Julio César Góngora León
**Director Jurídico, Presidente del Comité de Transparencia
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

C. c. p.

Lic. Marysol Contreras Navarrete.- Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.- Conocimiento.
Archivo.- Expediente.

DVCF

ÚLTIMA HOJA DEL OFICIO SESEAY/DJ/136/2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 QUE CONTIENE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO CON FOLIO 312005724000027, CONSTANTE DE 8 FOJAS IMPRESAS AL ANVERSO Y REVERSO DE UNA FOJA ÚTIL.

EL OFICIO ORIGINAL Y FIRMADO SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

Siendo las **trece horas** del día **17 de septiembre de 2024**, previa convocatoria, en las oficinas que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ubicadas en Avenida Alemán, número 51 entre calles 5 y 5 letra A de la colonia Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad de Mérida, Yucatán; la **Lic. Diana Valentina Chuc Franco**, en su carácter de Secretaria Técnica verificó y confirmó la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia que a continuación se señalan:

Nombre	Cargo
Lic. Julio César Góngora León	Director Jurídico / Titular de la Unidad de Transparencia, Presidente del Comité de Transparencia
L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández	Directora de Administración y Finanzas, Vocal del Comité de Transparencia
Lic. César David Martínez Paredes	Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas, Vocal del Comité de Transparencia
Lic. Diana Valentina Chuc Franco	Jefa del Departamento de Información y Documentación Jurídica, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Hecho lo anterior, al encontrarse la totalidad de los miembros que integran el Comité de Transparencia, el **Lic. Julio César Góngora León, Presidente del Comité** comprobó la existencia de cuórum legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo Provisional de Integración y Operación del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, se declaró formalmente el inicio de la **Décima Sexta Sesión Extraordinaria** del Comité de Transparencia, siendo las trece horas con diez minutos del día en que se actúa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se anexa a la presente Acta, la lista de asistencia de esta sesión con las firmas autógrafas, a la que se denominará **Anexo 1**, la cual formará parte integral de la misma.¹

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Tomando en consideración que el primer punto de la propuesta del Orden correspondió a la lista de asistencia y verificación del cuórum, mismo que se ha desahogado por su propia naturaleza al inicio de

¹ Anexo 1



esta sesión, se procedió a la lectura de los asuntos propuestos en el Orden del Día para su eventual aprobación, en los siguientes términos:

- I. Lista de asistencia y verificación del cuórum.
- II. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden de Día.
- III. Lectura, discusión y confirmación, en su caso de la clasificación de la información correspondiente a la solicitud de acceso a la información con folio **312005724000027** realizada por la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
- IV. Asuntos Generales.

A continuación, el Presidente del Comité de Transparencia puso a consideración el orden del día, y sin mayor pronunciamiento los integrantes del Comité votaron al respecto y se emitió el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/EXT/16/17-09-2024.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión.

III. Lectura, discusión y confirmación, en su caso de la clasificación de la información correspondiente a la solicitud de acceso a la información con folio 312005724000027.

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Presidente del comité manifiesta que se procederá a analizar la pertinencia de confirmar, modificar o revocar la reserva de la información relacionada con la solicitud de acceso a la información con folio **312005724000027**, misma que fue presentada por conducto de la Plataforma Nacional de Transparencia en fecha 9 de septiembre de 2024 y que fue atendida por la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a través del oficio número **SESEAY/DJ/136/2024** de fecha 12 de septiembre de 2024, que contiene la prueba de daño, suscrito por el Presidente del Comité en su calidad de Director Jurídico, quien manifestó en su parte conducente lo siguiente:

“(…) Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta unidad administrativa, se tiene a bien remitir la relación de los expedientes del Mecanismo de Queja, vigentes a la fecha de la solicitud de acceso a la información, relacionados a continuación:

	Expediente
1	04/SESEAY/DJ/MQ/2019
2	16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021
3	17/SESEAY/DJ/MQ/2022 y su acumulada 19/SESEAY/DJ/MQ/2022

*Asimismo, en cuanto a la entrega en versión digital de cada uno de los expedientes antes relacionados, me permito informar que en cuanto al expediente **04/SESEAY/DJ/MQ/2019**, en fecha 21 de enero de 2021, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de*



*Transparencia, cabe destacar que la confirmación de reserva de la información realizada por el área fue confirmada por dicho órgano colegiado por cuatro años. Por lo que corresponde a los expedientes **16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021 y 19/SESEAY/DJ/MQ/2022**, el 27 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, reservándose dichos expedientes por el período de cinco años; conviene precisar que al día de hoy dichos expedientes aún se encuentran en trámite, por lo que las causas que dieron origen a la reserva aún subsisten.*

*Ahora bien, en relación al expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, se informa que como lo ha interpretado el Pleno del Alto Tribunal en diversas ocasiones, el derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario tránsito de las vías adecuadas para ello.*

(...)

*Conforme a las disposiciones transcritas, podemos advertir los supuestos en los cuales el sujeto obligado se encuentra impedido para remitir la información solicitada, en el caso concreto, el acceso a las documentales que integran el expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, así como las actuaciones que se han realizado para darle la debida atención, puesto que el estado procesal se encuentra actualmente **en trámite**, lo que impide jurídicamente proporcionar información relativa al mismo, o bien, permitir su consulta; toda vez que su divulgación lesionaría el interés jurídicamente protegido por la legislación aplicable.*

(...)

Bajo lo argumentado, resulta aplicable la causal de reserva, en virtud de que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que, se actualizan los elementos señalados en los numerales Vigésimo séptimo; Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales

(...)

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del numeral 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la fracción I del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por el momento no resulta pertinente entregar al solicitante la información requerida sobre el expediente de queja en cuestión, por lo que solicito se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para que de acuerdo con lo establecido en los numerales 103 y 137 de la Ley General en cita, sea confirmada la clasificación de la información requerida, en los términos anteriormente expuestos.

(...)" (sic)



Posterior a la lectura del documento anterior, los miembros de este Comité de Transparencia realizaron el análisis jurídico sobre la clasificación de la reserva del expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, lo anterior en atención a los preceptos legales que se analizan a continuación.

Consideraciones del Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de reserva de la información.

Por lo anteriormente transcrito y desahogado en relación con la temática abordada en el orden del día, se procedió al análisis de la normativa invocada en relación con la clasificación de reserva de la información, de conformidad con lo anterior se establece lo siguiente:

La **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, señala lo siguiente:

Artículo 24. *Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*

(...)

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

(...)

Artículo 44. *Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:*

(...)

*II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;*

(...)

Artículo 100. *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.*

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas

Artículo 101. (...)

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.



Artículo 104. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 105. *Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.*

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

(...)

Artículo 108. *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. *Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

Artículo 113. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

(...)

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;



XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

(...)

Artículo 114. *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”*

Al respecto, la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán**, señala:

“Artículo 53. Negativa o inexistencia de la información

Los sujetos obligados únicamente podrán negar la información solicitada previa demostración o motivación de que esta encuadra en alguna de las siguientes causales:

I. Se trate de información confidencial o reservada.

(...)

Artículo 55. Funciones

Los comités de transparencia, para el cumplimiento del objeto de la ley, tendrán las funciones establecidas en el artículo 44 de la Ley general, así como la de identificar las obligaciones que le corresponde cumplir al sujeto obligado y las áreas responsables específicamente de proporcionar la información.

Artículo 78. Clasificación

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el título sexto de la Ley general y los lineamientos generales que emita el sistema nacional.”

Por su parte, los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas**, señalan:

“Primero. *Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.*

El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Cuarto. *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como*



en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

Séptimo. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

(...)

Octavo. *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Vigésimo séptimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:*

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

(...)

Vigésimo octavo. *De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar*



responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;*
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad; y*
- III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.*

Vigésimo noveno. *De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:*

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;*
- II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;*
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y*
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.*

Trigésimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y*
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; y*
- III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.*

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

- 1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y*
- 2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.*



No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

***Trigésimo cuarto.** El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva.*

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido.

Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.”

Bajo ese contexto, de forma unánime, el Comité de Transparencia procede a confirmar la **RESERVA DE LA INFORMACIÓN POR CINCO AÑOS RESPECTO AL EXPEDIENTE 17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, requerido en la solicitud de acceso a la información con folio **312005724000027**, en virtud de que recae en las causales previstas en los artículos 24, fracción VI; 44, fracción II; 100; 101 párrafo segundo; 104; 105; 106, fracción I; 108; 109; 113 fracciones VIII, IX, X, XI y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 53, fracción I, 55 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como en los numerales Primero, Cuarto, Séptimo, fracción I; Octavo; Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo; Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitiéndose el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO CT/EXT/16/17-09-2024.02

El Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, **CONFIRMA POR UNANIMIDAD la CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA POR CINCO AÑOS RESPECTO AL EXPEDIENTE 17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, requerido en la solicitud de acceso a la información con folio **312005724000027**, asimismo se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia notifique a la persona solicitante el sentido de la presente acta y la resolución que se adjunta al presente.

III. Asuntos Generales

El presidente del Comité pregunta a los integrantes si tienen algún tema que abordar en asuntos generales, quienes refieren que no existe asunto alguno a tratar.



Al no haber más asuntos a tratar, se da por concluida la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 17 de septiembre de 2024, levantándose para constancia la presente acta.

PARTICIPANTES	FIRMA
Lic. Julio César Góngora León Director Jurídico / Titular de la Unidad de Transparencia, Presidente del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández Directora de Administración y Finanzas, Vocal del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
Lic. César David Martínez Paredes Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas, Vocal del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
Lic. Diana Valentina Chuc Franco Jefe del Departamento de Información y Documentación Jurídica, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)

ÚLTIMA HOJA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SESEAY DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA CUAL CONSTA DE CINCO HOJAS IMPRESAS EN ANVERSO Y REVERSO.

EL ACTA ORIGINAL Y FIRMADA SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SESEAY.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Asunto: **Resolución**

Número de folio: **312005724000027**

Mérida, Yucatán, a 17 de septiembre de 2024.

VISTOS: Para resolver la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: **312005724000027**, presentada en fecha **09 de septiembre de 2024**, por lo que se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Solicitud de acceso a la información. Con fecha **09 de septiembre de 2024**, la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (en adelante, “SESEAY”), tuvo por recibida en la Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio **312005724000027**, en la referida solicitud se requirió acceso a la siguiente información:

“Quiero que me informen sobre la relación de expedientes vigentes del Mecanismo de Queja que tienen a su cargo y me proporcionen la versión digital de cada expediente vigente” (sic)

III. Respuesta al requerimiento. Mediante el oficio **SESEAY/DJ/136/2024** de fecha 12 de septiembre de 2024, el Lic. Julio César Góngora León, Director Jurídico, Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de la SESEAY, remitió prueba de daño y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría, con la finalidad de que dicho colegiado proceda a valorar y emitir la confirmación de la clasificación de reserva debido a que la información solicitada guarda relación con expedientes del mecanismo de queja que actualmente se encuentran en trámite, manifestando en su parte conducente lo siguiente:

“(…) Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta unidad administrativa, se tiene a bien remitir la relación de los expedientes del Mecanismo de Queja, vigentes a la fecha de la solicitud de acceso a la información, relacionados a continuación:

	Expediente
1	04/SESEAY/DJ/MQ/2019
2	16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021



3	17/SESEAY/DJ/MQ/2022 y su acumulada 19/SESEAY/DJ/MQ/2022
---	---

Asimismo, en cuanto a la entrega en versión digital de cada uno de los expedientes antes relacionados, me permito informar que en cuanto al expediente **04/SESEAY/DJ/MQ/2019**, en fecha 21 de enero de 2021, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, cabe destacar que la confirmación de reserva de la información realizada por el área fue confirmada por dicho órgano colegiado por cuatro años. Por lo que corresponde a los expedientes **16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021 y 19/SESEAY/DJ/MQ/2022**, el 27 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, reservándose dichos expedientes por el período de cinco años; conviene precisar que al día de hoy dichos expedientes aún se encuentran en trámite, por lo que las causas que dieron origen a la reserva aún subsisten.

Ahora bien, en relación al expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, se informa que como lo ha interpretado el Pleno del Alto Tribunal en diversas ocasiones, el derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario tránsito de las vías adecuadas para ello.

(...)

Conforme a las disposiciones transcritas, podemos advertir los supuestos en los cuales el sujeto obligado se encuentra impedido para remitir la información solicitada, en el caso concreto, el acceso a las documentales que integran el expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, así como las actuaciones que se han realizado para darle la debida atención, puesto que el estado procesal se encuentra actualmente **en trámite**, lo que impide jurídicamente proporcionar información relativa al mismo, o bien, permitir su consulta; toda vez que su divulgación lesionaría el interés jurídicamente protegido por la legislación aplicable.

(...)

Bajo lo argumentado, resulta aplicable la causal de reserva, en virtud de que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que, se actualizan los elementos señalados en los numerales Vigésimo séptimo; Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales

(...)

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del numeral 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con la fracción I del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por el momento no resulta pertinente entregar al solicitante la información requerida sobre el expediente de queja en



cuestión, por lo que solicito se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para que de acuerdo con lo establecido en los numerales 103 y 137 de la Ley General en cita, sea confirmada la clasificación de la información requerida, en los términos anteriormente expuestos.

(...)” (sic)

IV. Remisión del expediente al Comité de Transparencia. Se sometió a consideración de este Comité, lo requerido en la solicitud de mérito, por lo que se puso a disposición de sus integrantes el oficio a efecto de que procedan a su análisis para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la confirmación, modificación o revocación de las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, según lo dispuesto en el artículo 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Consideraciones del Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de reserva de la información. De la revisión a la prueba de daño remitida por el Director Jurídico de la SESEAY, así como de conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de Transparencia procede a valorar la clasificación de información con el carácter de reservada por el período de cinco años por contener información, que encuadra con las condiciones previstas en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que se cumplen, a su vez, numerales Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para elaboración de las versiones públicas, considerando que:

1. Existe un procedimiento de investigación, el cual versa sobre la posible existencia de faltas administrativas o hechos de corrupción, esto es, un procedimiento de responsabilidad como el que se prevé en la fracción I del numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales.
2. Dichos procedimientos se encuentran en curso o trámite, en los cuales se precisa una fecha de inicio, mas no una fecha de conclusión o terminación, toda vez que los asuntos en cuestión se encuentran en un proceso deliberativo que se sigue de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento del Mecanismo de Queja, por tanto, las actuaciones, diligencias y constancias que se deriven, son propias de un procedimiento de responsabilidad.



3. La información consiste en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo, lo anterior, en virtud de encontrarse en trámite el procedimiento de investigación del que son objeto los expedientes solicitados.
4. Existe una vinculación directa entre la información solicitada y las actuaciones que realiza esta Entidad con el procedimiento de investigación;
5. Su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, toda vez que se trata de procedimientos seguidos en forma de juicio, mismos que no han causado estado, es decir, que no se ha emitido una decisión o resolución definitiva.

I. Marco Jurídico Nacional Aplicable

Toda vez que el tema que nos ocupa se refiere a la clasificación de información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable para la reserva de información, concretamente lo previsto en el artículo 6º apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé lo siguiente:

“Artículo 6º.

(...)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, ***es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (...)***

Para el caso que nos ocupa, resulta procedente que el Comité de Transparencia en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realice el estudio correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaración de clasificación de reserva de la información solicitada por el área requerida, en términos de lo previsto en la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, que señala lo siguiente:

Artículo 24. *Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*



(...)

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

(...)

Artículo 44. *Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:*

(...)

*II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;*

(...)

Artículo 100. *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.*

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas

Artículo 101. (...)

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Artículo 104. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 105. *Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones*

al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.



La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

(...)

Artículo 108. *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. *Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

Artículo 113. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

(...)

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

(...)

Artículo 114. *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”*

Por su parte, la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán**, señala:

“Artículo 53. Negativa o inexistencia de la información



Los sujetos obligados únicamente podrán negar la información solicitada previa demostración o motivación de que esta encuadra en alguna de las siguientes causales:

I. Se trate de información confidencial o reservada.

(...)

Artículo 55. Funciones

Los comités de transparencia, para el cumplimiento del objeto de la ley, tendrán las funciones establecidas en el artículo 44 de la Ley general, así como la de identificar las obligaciones que le corresponde cumplir al sujeto obligado y las áreas responsables específicamente de proporcionar la información.

Artículo 78. Clasificación

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el título sexto de la Ley general y los lineamientos generales que emita el sistema nacional.”

Al respecto, los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas**, señalan:

*“**Primero.** Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.*

El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

***Cuarto.** Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

***Séptimo.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

(...)



Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
- II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
- III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
- IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

(...)

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad; y
- III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.



Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
- II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; y
- III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva.

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido.

Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño.



Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.”

II. Procedimiento de Queja.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Mecanismo de Queja, este procedimiento, tiene como finalidad sustanciar las quejas presentadas ante la comisión ejecutiva por cualquier persona, o aquellas iniciadas de oficio, y mediante la valoración de los medios de prueba que se aporten o, en su caso, se hayan obtenido mediante la investigación, determine la posible existencia o no de faltas administrativas o hechos de corrupción y, en su caso, dirija a las autoridades o servidores públicos estatales o municipales, o particulares responsables, una recomendación no vinculante, pública y de carácter institucional, que pueda contener una política pública que enmarque buenas prácticas, en forma activa o pasiva, con el firme propósito de fortalecer la cultura de integridad y el comportamiento ético.

A su vez, el artículo 13 del Reglamento antes citado, señala que toda persona podrá presentar ante la comisión ejecutiva, de manera personal o a través de sus representantes, quejas relacionadas con actos u omisiones de autoridades o servidores públicos de carácter estatal o municipal, o particulares, que constituyan o puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.

Bajo esa tesitura, la aportación de información objetiva que permita la substanciación del procedimiento en comento, las investigaciones y los trámites que se realicen, así como la documentación recibida de la autoridad o el particular señalado como responsable y de la parte quejosa, se manejarán con absoluta reserva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento en cita; de ahí que, resulte por lo menos hasta este momento procesal, improcedente proporcionar la información requerida, puesto que aún no se ha concluido el procedimiento y por tanto no se ha alcanzado el objetivo del Mecanismo de queja.

Resulta aplicable al caso en la parte conducente, la tesis 1a. VIII/2012 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, visible en la página 656, cuyo rubro es el siguiente:

“INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a



la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.”

III. Prueba de daño

Junto a la identificación de los supuestos normativos invocados en los párrafos que anteceden y con el ánimo de proyectar a cabalidad el principio constitucional que les da sentido, la Ley General en sus artículos 101, 103, 104 y 114, considera que si bien es cierto que a través del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6, apartado A, fracción I constitucional, cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información catalogada como reservada.

En este sentido, la respuesta por parte de la Dirección Jurídica de la SESEAY, justificó la pertinencia de la reserva de la información, a través de los argumentos vertidos en la prueba de daño, especificando los motivos y los fundamentos legales de dicha clasificación. Cabe señalar que de entregar la documentación correspondiente, se causaría un daño presente, probable y específico al interés público, a saber:

- **Daño Presente:** Se advierte que puede transgredir u obstruir la conducción de los expedientes o de los procedimientos, en tanto no hayan concluido. Asimismo, al ser el mecanismo de queja un procedimiento seguido en forma de juicio, al proporcionar documentos que integren expedientes en trámite afectará el derecho al debido



proceso y los principios que lo rigen, como lo son la igualdad, legalidad, justicia, imparcialidad y seguridad jurídica.

- **Daño Probable:** De entregar la documentación en cuestión, esta podría ocasionar que terceras personas realicen acciones que se traduzcan en el entorpecimiento del procedimiento que se lleva actualmente y que son materia de la resolución que se emita en el momento oportuno, o bien, en su caso puedan vulnerar la conducción de los mismos. Lo anterior, en razón de que en este expediente se señalan los argumentos manifestados por las partes y cuya divulgación podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de todo procedimiento, en tanto no se de una conclusión respectiva y a su vez, haya causado estado.
- **Daño Específico:** La información solicitada puede ocasionar que terceras personas la utilicen en beneficio propio, por lo tanto, el hecho de hacer pública información que contiene un expediente sin concluir, amenaza el interés público protegido por la Ley. En consecuencia, el área responsable de la información debe garantizar en todo momento el desarrollo de los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio.

Así, en el caso particular, el conocimiento de esa noción ampliada al alcance del supuesto de reserva, trasladado al caso que nos ocupa, lleva a este Comité de Transparencia a tener configurada su esencia. En el contexto de lo anterior es necesario precisar que la reserva de **cinco años** se debe a que el procedimiento de queja se compone de una serie de pasos que aún están por llevarse a cabo, no obstante, dicha investigación aún no llega a su término.

A modo de resumir lo anterior, si bien en el caso particular, tenemos que el derecho de acceso a la información constituye fines legítimos, el cual se encuentra consagrado en el marco constitucional y legal previamente aludido, al realizar una ponderación entre los derechos, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la reserva de la información, la cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

Por otra parte, de acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que la afectación que podría traer la divulgación de la información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, de conformidad con la valoración de daños realizada con anterioridad por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su reserva, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la privacidad.

En tal virtud, de acuerdo con los fundamentos y motivos expuestos, este Comité de Transparencia concluye que no es procedente proporcionar la información solicitada y por tanto confirma la clasificación de la información descrita en párrafos precedentes como reservada por el período de **cinco años**, hasta no haber causado estado dicho expediente.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán:

RESUELVE:



PRIMERO. Esté Comité de Transparencia por unanimidad de votos y con fundamento en la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **CONFIRMA POR UNANIMIDAD la CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA POR CINCO AÑOS RESPECTO AL EXPEDIENTE 17/SESEAY/DJ/MQ/2022**, requerido en la solicitud de acceso a la información con folio **312005724000027**.

SEGUNDO. Infórmese al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada mediante el Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificación al solicitante del sentido de la presente resolución.

Así, por unanimidad resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el 17 de septiembre de 2024.

PARTICIPANTES	FIRMA
Lic. Julio César Góngora León Director Jurídico /Titular de la Unidad de Transparencia, Presidente del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
L.A.E. María Alejandra Osorio Hernández Directora de Administración y Finanzas, Vocal del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
Lic. César David Martínez Paredes Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas, Vocal del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)
Lic. Diana Valentina Chuc Franco Jefa de Información y Documentación Jurídica, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia	(RÚBRICA)

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA CON NÚMERO DE FOLIO 312005724000027 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONSTANTE DE 7 HOJAS IMPRESAS EN ANVERSO Y REVERSO.

LA RESOLUCIÓN ORIGINAL Y FIRMADA SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SESEAY.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolución a la solicitud de información marcada con el folio **312005724000027**.

Oficio No.: SESEAY/UT/56/2024

Mérida, Yucatán, a 23 de septiembre de 2024

VISTOS para resolver la solicitud marcada con el folio: **312005724000027**, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En fecha **9 de septiembre de 2024**, de conformidad con el acuse de presentación de solicitud de acceso a la información pública, emitida por la Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY), tuvo por presentada la solicitud marcada con el folio **312005724000027**.

II. De la revisión de la solicitud en comento, se desprende que la persona solicitante requirió información en los términos siguientes:

“Quiero que me informen sobre la relación de expedientes vigentes del Mecanismo de Queja que tienen a su cargo y me proporcionen la versión digital de cada expediente vigente.” (sic)

III. Mediante el oficio **SESEAY/DJ/136/2024** de fecha 12 de septiembre de 2024, el Lic. Julio César Góngora León, Director Jurídico, Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de la SESEAY, remitió la respuesta que contiene la relación de expedientes vigentes, así como la prueba de daño, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que solicitó se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría, con la finalidad de que dicho colegiado proceda a valorar y emitir la confirmación de la clasificación de reserva debido a que la información solicitada guarda relación con un expediente del mecanismo de queja que actualmente se encuentra en trámite, para los efectos correspondientes.

IV. En su **Décima Sexta Sesión Extraordinaria** de fecha 17 de septiembre de 2024, el Comité de Transparencia de la SESEAY confirmó la clasificación de

reserva de la información solicitada por la Dirección Jurídica de la SESEAY a través de la prueba de daño.

De acuerdo a lo anterior, se procede a resolver la presente solicitud conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del comité coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 101 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tiene entre sus funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del propio Instituto, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Establecido lo anterior, se remite la prueba de daño relativa a la solicitud presentada, emitida a través de oficio **SESEAY/DJ/136/2024**, misma que se envía en versión electrónica.

CUARTO. De conformidad a lo establecido en los artículos 19, 20, 44, fracción II, 138, fracciones I, II y III y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 53, fracción III y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, resultó conducente convocar al Comité de Transparencia de esta Secretaría, en virtud de ser la autoridad encargada de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación de plazo de respuesta, **clasificación de información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas, a fin de que proceda a acordar lo conducente respecto de la información antes aludida.

No se omite manifestar, que la clasificación de reserva de la información realizada por el área, fue confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, en los siguientes términos:

RESUELVE:

PRIMERO. *El Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, CONFIRMA POR UNANIMIDAD la CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA POR CINCO AÑOS RESPECTO AL EXPEDIENTE 17/SESEAY/DJ/MQ/2022, requerido en la solicitud de acceso a la información con folio 312005724000027, asimismo se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia notifique a la persona solicitante el sentido de la presente acta y la resolución que se adjunta al presente.*

QUINTO. Es menester señalar que de conformidad con lo establecido en los artículos 44 fracción II y 113 fracciones VIII, IX y X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el numeral 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Comité de Transparencia de esta Entidad, llevó a cabo la reserva de la información respecto a los expedientes **04/SESEAY/DJ/MQ/2019, 16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021 y 19/SESEAY/DJ/MQ/2022** de acuerdo a lo siguiente:

En cuanto al expediente **04/SESEAY/DJ/MQ/2019**, en fecha 21 de enero de 2021, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, cabe destacar que la confirmación de reserva de la información realizada por el área fue confirmada por dicho órgano colegiado por cuatro años. Por lo que corresponde a los expedientes **16/SESEAY/DJ/MQ/2021 y su acumulada 17/SESEAY/DJ/MQ/2021 y 19/SESEAY/DJ/MQ/2022**, el 27 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, reservándose dichos expedientes por el período de cinco años; conviene precisar que al día de hoy dichos expedientes aún se encuentran en trámite, por lo que las causas que dieron origen a la reserva aún subsisten.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción:

RESUELVE:

PRIMERO. Se hace **ENTREGA** a la persona solicitante de la respuesta presentada por el Director Jurídico de la SESEAY la cual se remite digitalmente.

SEGUNDO. Se comunica a la persona solicitante que la información requerida sobre el expediente **17/SESEAY/DJ/MQ/2022** tiene el carácter de reservada, misma clasificación que fue **CONFIRMADA** por el Comité de Transparencia de la SESEAY, por el plazo y de acuerdo a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución.

TERCERO. Infórmese al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

CUARTO. Notifíquese al solicitante el sentido de esta resolución.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Lic. Julio César Góngora León, en el Municipio de Mérida, Yucatán, el 23 de septiembre de 2024.

A T E N T A M E N T E

(RÚBRICA)

Lic. Julio César Góngora León
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

JCGL/ymus

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON NÚMERO DE FOLIO 312005724000027 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONSTANTE DE 2 FOJAS IMPRESAS EN ANVERSO Y REVERSO.

LA RESOLUCIÓN ORIGINAL Y FIRMADA SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SESEAY.